

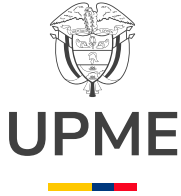
**Pacto Educativo para la Planeación Energética
en Colombia y la Transición Energética Justa**

Resumen Ejecutivo

**Documento de Análisis Global
sobre las Dimensiones Territoriales,
Sociales, Ambientales y de Género**

de los Casos de Conflictividad Social en el
Sector Minero-Energético Colombiano y
Recomendaciones para Abordar y Mitigar
los Conflictos





© UPME
Av. Calle 26 # 69 D-91 Torre 1 - Piso 9
Bogotá - Colombia
Tel.: +57 6012220601
upme.gov.co

EDWIN PALMA EGEA
Ministro de Minas y Energía

INDIRA PORTOCARRERO OSPINA
Directora General UPME

JOSHUA CALEM GALVIS FAYAD
Coordinador Grupo de Enfoque Territorial UPME

Resumen Elaborado por :

ATTILA LENTI
Asesor a la Dirección General UPME
SAM Y ANDRÉS MAFLA NOGUERA
Equipo de Enfoque Territorial, UPME
CÉSAR SIAUCHO
Equipo de Enfoque Territorial, UPME

Comunicaciones UPME:

KAREN MORENO PLATA
Asesora de la Dirección General

Diseño y Diagramación:

RAFAELA FORERO RODRÍGUEZ
DIEGO PEÑARANDA JUYÓ

Este resumen ejecutivo forma parte de los resultados del Convenio CO1.PCCNTR.5494215 entre la Fundación Paz y Reconciliación y la UPME

*Fecha de elaboración del estudio original: diciembre de 2023
Fecha de elaboración del resumen ejecutivo: marzo de 2026*

Documento de análisis global sobre las dimensiones territoriales, sociales, ambientales y de género de los casos de conflictividad social en el sector minero-energético colombiano y recomendaciones para abordar y mitigar los conflictos¹

Año (2024)

Contexto del estudio

El documento presenta un análisis de la conflictividad socio ambiental en el sector minero-energético colombiano, considerando diferentes dimensiones: territoriales, sociales, ambientales y de género. Su objetivo es identificar y comprender los conflictos asociados a proyectos de gran escala que se desarrollan en contextos muy específicos, como territorios indígenas, zonas con presencia de minería informal y áreas con tensiones históricas entre comunidades y empresas.

El estudio se realiza en el marco del contrato CO1.PCCNTR.5494215 entre la Fundación Paz y Reconciliación y la UPME, como parte del Pacto Educativo para la Planeación Energética y la Transición Energética Justa. Para ello, combina una base de datos de casos de conflictividad con tres estudios de caso específicos: el proyecto eólico Windpeshi de Enel en La Guajira, el proyecto de extracción de cobre de Libero Copper en Mocoa (Putumayo) y el paro minero del Bajo Cauca Antioqueño de 2023. El informe no solo documenta los conflictos, sino que busca generar recomendaciones de política pública para transformar esas tensiones en oportunidades territoriales.

Análisis de la base de datos

El informe inicia con un análisis cuantitativo de la base de datos de casos de conflictividad social en el sector minero-energético. En términos geográficos, Antioquia concentra el mayor número de casos con 6, seguida por La Guajira (3 casos) y Santander (2 casos), lo que destaca a estos departamentos como focos principales de conflictividad. A nivel municipal, Uribia registra 3 casos y Marmato 2, mostrando una concentración en territorios específicos donde hay presencia de proyectos extractivos y dinámicas sociales particulares.

En el análisis temporal, el documento observa un nivel moderado de conflictos entre 2016 y 2017, una disminución en 2018 y 2019, y un punto mínimo en 2020 con solo un caso, posiblemente por los efectos de la pandemia. A partir de 2021 se registra un repunte, con un pico de 9 casos en 2022 y 7 casos en 2023, lo que indica una reactivación de la conflictividad en el periodo pospandémico. Esta distribución permite concluir que los conflictos están geográficamente focalizados y temporalmente cíclicos.

¹ https://docs.upme.gov.co/Documents/Enfoque-territorial/Resultados_convenios/6_Documento_de_analisis_global_y_recomendaciones_para_gestionar_los_conflictos_PARES_v2.pdf

Enfoque y metodología

La metodología del estudio combina un análisis cuantitativo de la base de datos con un análisis cualitativo y comparado de tres casos representativos. La base de datos permite identificar patrones generales de conflictividad, mientras que los estudios de caso profundizan en las dinámicas específicas de cada territorio. Para Windpeshi se analizan las tensiones con comunidades Wayuu alrededor de la consulta previa; para Libero Copper se examinan los conflictos en Mocoa por impactos ambientales y sociales; y para el paro minero del Bajo Cauca se estudian las tensiones entre minería formal, informal y grupos armados.

Este enfoque permite no solo describir los conflictos, sino también compararlos en ejes temáticos como consulta previa, gobernanza territorial, estrategias de movilización, formalización minera y rol de organizaciones ambientales. El método se basa en la articulación de fuentes documentales, entrevistas y análisis comparativo para construir una visión un poco más integral de la conflictividad.

Principales hallazgos

Los hallazgos principales se organizan en seis ejes comparativos entre los casos. Primero, la consulta previa aparece como un derecho central en Windpeshi y Libero Copper, donde se evidencian tensiones sobre la legitimidad del diálogo, el reconocimiento de autoridades y la participación efectiva de comunidades étnicas. Segundo, existe una tensión entre gobiernos locales y nacional en la gestión de recursos, ilustrada por el acuerdo municipal de 2018 en Mocoa que prohíbe la minería.

Tercero, las estrategias de movilización varían: jurídico-administrativas en Windpeshi y Libero Copper (tutelas, derechos de petición), pero más confrontativas en el Bajo Cauca (bloqueos, asonadas). Cuarto, la formalización de la minería artesanal enfrenta barreras graves por la influencia del Clan del Golfo en regiones como Bajo Cauca, Marmato y Río Quito. Quinto, organizaciones ambientales como Nación Wayuu, Pastoral Social y Mesa Minera del Río Nechí juegan roles clave en la representación y movilización. Sexto, las empresas (Enel, Libero Copper, Mineros Aluvial) tienen un impacto profundo en las dinámicas locales y requieren enfoques más sensibles al territorio.

Retos y cuellos de botella

El informe identifica varios retos para el manejo de la conflictividad. Primero, la falta de mecanismos efectivos para la consulta previa en contextos étnicos complejos, donde se generan divisiones y cuestionamientos a la legitimidad. Segundo, la descoordinación entre niveles de gobierno que genera desacuerdos entre competencias. Tercero, la desconfianza en los canales institucionales que lleva a estrategias de movilización más agresivas y recurrentes.

Cuarto, la influencia de actores armados que obstaculiza la formalización minera y perpetúa la informalidad. Quinto, la capacidad limitada de las organizaciones ambientales para mediar sin generar polarización. Sexto, la dificultad de las empresas para equilibrar intereses económicos

con responsabilidades sociales y ambientales en territorios sensibles. Estos retos muestran que la conflictividad es sistémica y requiere soluciones integrales.

Recomendaciones clave

Para abordar la conflictividad social en el sector minero-energético, el documento propone fortalecer la consulta previa con procesos culturalmente que respeten la cosmovisión y autodeterminación de las comunidades étnicas, evitando así divisiones internas que suelen dificultar el diálogo. Igualmente, se requiere crear mecanismos efectivos de coordinación intergubernamental entre niveles locales y nacional para armonizar competencias sobre suelo y subsuelo, lo que implica una actualización rigurosa del ordenamiento territorial. Además, es fundamental diversificar los canales y/o mecanismos de diálogo institucional, combinando herramientas jurídico-administrativas con espacios de negociación territorial que prevengan acciones de movilización.

Otra recomendación es la de impulsar procesos de formalización minera con protección frente a actores armados y acompañamiento institucional para pequeños mineros, así como fortalecer la capacidad de organizaciones ambientales para mediar conflictos, mediante formación y acceso a información. Finalmente, las empresas deben adoptar enfoques territoriales que integren desde la fase de planeación los impactos sociales, ambientales y culturales, garantizando una gestión más alineada con las realidades locales.

